

Argentina: una cartografía de las resistencias (2003-2008). Entre las luchas por la inclusión y las discusiones sobre el modelo de desarrollo	Título
Svampa, Maristella - Autor/a	Autor(es)
OSAL, Observatorio Social de América Latina (Año IX no. 24 oct 2008)	En:
Buenos Aires	Lugar
CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales	Editorial/Editor
2008	Fecha
	Colección
Soybeans; Agribusiness; Mining; Environment; Peasant and indigenous movements; Trade unionism; Unemployed; Picketers; Fábricas recuperadas; Democracia; Neoliberalismo; Empresas transnacionales; Agronegocios; Soja; Medio ambiente; Minería; Movimientos campesinos e indígenas; Sindicalismo; Desocupados; Piqueteros; Transnational corporations; Neoliberalism; Democracy; Recovered factories; Argentina;	Temas
Artículo	Tipo de documento
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/clacso/osal/20110418104401/02svampa.pdf	URL
Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 2.0 Genérica http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/deed.es	Licencia

Segui buscando en la Red de Bibliotecas Virtuales de CLACSO

<http://biblioteca.clacso.edu.ar>

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO)

Conselho Latino-americano de Ciências Sociais (CLACSO)

Latin American Council of Social Sciences (CLACSO)

www.clacso.edu.ar



Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
Conselho Latino-americano de Ciências Sociais
Latin American Council of Social Sciences



Argentina: una cartografía de las resistencias (2003-2008)

Entre las luchas por la inclusión
y las discusiones sobre el
modelo de desarrollo

Maristella Svampa

Doctora en Ciencias Sociales. Investigadora del CONICET y la Universidad
Nacional de General Sarmiento (UNGS).

Resumen

El artículo plantea que en el año 2004, en Argentina, se pasó de una demanda de solidaridad a la de orden y que a pesar de la recuperación económica crecieron las desigualdades sociales. Agrega que el gobierno cooptó movimientos de desocupados piqueteros y que estos se fraccionaron y perdieron protagonismo. Añade que aparecieron fuertes movimientos sindicales, muchas veces opuestos a las direcciones de los sindicatos. Sostiene que las fábricas recuperadas se institucionalizaron y que surgieron movimientos de clase media contra la precariedad. La expansión de la soja chocó con los pueblos originarios y con la economía campesina y la disputa de la renta extraordinaria entre el gobierno y los exportadores, concluye, ha instaurado un clima de tensión política.

Abstract

The article puts forward the idea that in 2004 in Argentina there was a switch from a demand for solidarity to one for order, and in spite of economic recovery, there was an increase in social inequality. It adds that the government co-opted unemployed picket movements, which were then broken up and lost importance. Moreover, it states that strong trade union movements appeared, which on many occasions were opposed to the direction of the unions. It sustains that the recovered factories were insti-

tutionalized and that middle class movements against instability rose up. The expansion of soybean production clashed with the indigenous peoples and the rural economy. It concludes that the dispute over the extraordinary incomes, between the government and the exporting farmers, has led to a climate of political tension.

Palabras clave

Desocupados, piqueteros, neoliberalismo, transnacionales, movimientos campesinos e indígenas, medioambiente, sindicalismo, democracia, fábricas recuperadas, minería, soja, agronegocios.

Keywords

Unemployed, picketers, neoliberalism, transnational corporations, rural and indigenous movements, environment, trade unionism, democracy, recovered factories, mining, soybeans, agribusiness.

Mucho se ha hablado de los éxitos políticos y económicos que marcaron la gestión del gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007). Entre ellos, se destaca la salida de la gran crisis de 2001-2002, que sacudió los cimientos de la sociedad argentina. En este sentido, cabe recordar que esta crisis estuvo recorrida por demandas ambivalentes y contradictorias. Por un lado, existía un llamado a la solidaridad y a la autoorganización social, lo cual desembocó en la conformación de un rico campo multiorganizacional de carácter antineoliberal; por otro, la crisis expresaba también un fuerte llamado al orden y al retorno a la normalidad frente a lo que podía considerarse como una amenaza de disolución social. Así, durante 2002, la Argentina se convirtió en un laboratorio de nuevas formas de acción colectiva, visibles en las movilizaciones de los desocupados, el surgimiento de asambleas barriales, la recuperación de fábricas quebradas y la multiplicación de colectivos culturales. Durante un tiempo, en este escenario de efervescencia y de cruces sociales inéditos, tendió a imponerse la demanda de solidaridad. Sin embargo, a principios de 2003, el declive de las nuevas movilizaciones así como la fragmentación de las organizaciones de desocupados fueron diluyendo la expectativa de una recomposición política “desde abajo”, para dar paso a una fuerte demanda de orden y normalidad. En este sentido, Kirchner se hizo eco de este mensaje social, en la medida en que apuntó a encarnar la exigencia creciente de normalidad, tal como aparecía ilustrado en su consigna “Por un país en serio, por un país normal”.

Sin embargo, los primeros gestos políticos de Kirchner fueron más allá de esta demanda, mostrando una vez más la productividad política del peronismo, en un escenario de crisis que desembocó en el colapso de gran parte del sistema partidario argentino. Productividad manifiesta en las primeras medidas, que generaron una amplia expectativa social y recolocaron en el primer plano el sistema institucional, redefiniendo así la escena política. Entre los primeros gestos políticos, es preciso destacar el descabezamiento de la cúpula militar y el recambio de la Corte Suprema de Justicia, esta última estrechamente asociada al régimen de los noventa. Asimismo, el gobierno de Kirchner asumió como política de Estado la condena a la violación de los derechos humanos realizada durante la última dictadura militar (1976-1983), lo cual contribuyó a echar por tierra la “teoría de los dos demonios” –que ponía en el mismo plano el terrorismo de Estado y la acción de los guerrilleros– que habían avalado las gestiones anteriores, así como a impulsar una política de la memoria; demandas intrínsecamente ligadas a la larga lucha de las organizaciones de derechos humanos en la Argentina.

De este modo, el gobierno de Kirchner tuvo la habilidad de instalarse en un espacio de crítica al neoliberalismo, nota común de las grandes movilizaciones de 2002. A su vez, su llegada se vio favorecida por la emergencia de un nuevo polo latinoamericano, visible en el surgimiento de gobiernos de “centroizquierda”, como el de Lula en Brasil y Chávez en Venezuela, en un contexto de crisis y crítica del consenso neoliberal. Este cambio de clima ideológico se expresaría en la retórica antineoliberal que Kirchner asumiría desde mediados del año 2003, que apuntaría a ciertos agentes económicos nacionales (en especial, los productores del campo), así como a algunas empresas privatizadas en manos de consorcios multinacionales. Esta retórica tuvo la capacidad de interpelar a gran parte del campo militante, que se reconoce deudor de la tradición nacional-popular asociada al peronismo histórico.

Por último, al final de su gestión, Kirchner podía exhibir así logros económicos importantes respecto de la gran crisis de 2002, cuando la devaluación produjo una caída del Producto Interno Bruto (PIB) del 16%, la tasa de desocupación llegó a alcanzar un 21% y el salario real disminuyó un 24%. Entre 2003 y 2007, el PIB alcanzó un crecimiento anual de alrededor del 9%, mientras que la desocupación fue descendiendo del 17,3% en 2003 al 8,5% en 2007, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). En gran medida, las altas tasas de crecimiento económico y el superávit fiscal se deben a la recuperación de la industria, post-devaluación, así como a la expansión vertiginosa del modelo extractivo-exportador y la consolidación de un nuevo modelo agrario.

«Nos abocaremos a dar cuenta de los cambios originados en el espacio organizacional piquetero (desocupados), así como en las dimensiones más novedosas que asume la acción sindical»

Pese a los buenos índices macroeconómicos, el crecimiento fue muy desigual. Las brechas económicas y sociales abiertas en los noventa, y reforzadas luego de la salida desordenada de la convertibilidad entre el peso y el dólar, se consolidaron. Así, si en la década anterior, el 10% más rico ganaba 20 veces más que el 10% más pobre, en la actualidad, la brecha es un 35% más amplia: el primero supera 27 veces al segundo. Ciertamente es la pobreza, que al comienzo de la gestión de Kirchner alcanzaba el 57%, se redujo al 34%. Pero en los noventa la brecha era del 24% (Lozano, 2005; 2006), todo lo cual hace pensar que la crisis de 2002 instaló un nuevo umbral desde el cual pensar las desigualdades.

En este marco de salida de la crisis, éxito económico, persistencia de las desigualdades, reactivación de la tradición nacional-popular y reforzamiento del sistema presidencialista, se operaría un fuerte corrimiento de las fronteras del conflicto social: así, entre 2003 y 2008 asistimos, por un lado, a una reconfiguración de las organizaciones de desocupados y una reemergencia del conflicto sindical; por otro, al compás de la explosión de los conflictos socioambientales, irían cobrando mayor importancia y visibilidad tanto las antiguas como las nuevas formas de lucha por la tierra y el territorio. En todo caso, la dinámica de dichos conflictos va diseñando una cartografía de las resistencias diferente a la de los noventa, pero en la que prevalecen los lenguajes de movilización pergeñados en aquella época: la utilización de la acción directa, la expansión de la forma asamblea y la demanda de autonomía.

En lo que sigue, a fin de apreciar los contornos de esta nueva cartografía, proponemos al lector un recorrido en dos momentos: en primer lugar, nos abocaremos a dar cuenta de los cambios originados en el espacio organizacional piquetero (desocupados), así como en las dimensiones más novedosas que asume la acción sindical; en segundo, presentaremos

las luchas de los movimientos campesinos e indígenas, las características de las nuevas asambleas socioambientales (contra la minería tóxica y las papeleras), para terminar con un breve resumen acerca del alcance y las nuevas oportunidades que se abren frente al reciente conflicto que enfrentó al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2008) con los diferentes sectores del agro movilizado (abril-julio de 2008).

De la centralidad de los desocupados a la reemergencia del conflicto sindical. La reconfiguración del espacio piquetero

No es ninguna novedad que en la Argentina de la última década emergieron nuevas formas de organización y acción colectiva, como producto de la resistencia a las políticas neoliberales. Entre estas expresiones, la nota más original fue la emergencia de un conjunto de movimientos de desocupados (piqueteros), a partir de 1996-1997. Desde sus orígenes, dichos movimientos estuvieron atravesados por diferentes corrientes político-ideológicas, que incluyen desde el populismo nacionalista hasta una multiplicidad de organizaciones de corte anticapitalista¹. Sin embargo, pese a la heterogeneidad político-ideológica, la existencia de un repertorio de acciones comunes y el desarrollo de una estrategia de cooperación entre las diferentes corrientes hizo posible que pudiéramos hablar de un “movimiento piquetero”, en creciente ascenso político-social, más allá de los fuertes episodios de represión registrados. Esto fue lo que efectivamente sucedió hasta mediados de 2001, año en que se realizaron las dos grandes asambleas piqueteras que reunieron a la casi totalidad del nuevo arco militante.

Como hemos dicho, con la asunción de Néstor Kirchner, varias cosas cambiaron. Ciertamente es que el nuevo gobierno se encontró con organizaciones piqueteras que contaban con un fuerte poder de convocatoria, en especial luego de las grandes movilizaciones de 2002. Sin embargo, la gran represión llevada a cabo en junio de ese año, que costó la vida de dos jóvenes militantes y centenares de heridos, supuso una primera gran inflexión, que golpeó de lleno a las organizaciones y movilizó a vastos sectores sociales en contra de una política represiva abierta y la amenaza de instalación de un Estado autoritario. Al mismo tiempo, las organizaciones piqueteras ya mostraban una gran heterogeneidad ideológica y una tendencia cada vez mayor a la fragmentación. En este sentido, la política de Kirchner consistió en poner en acto, simultáneamente, el abanico de estrategias disponibles para integrar, cooptar y disciplinar a las organizaciones piqueteras, pero evitando la represión abierta y sistemática que la propia sociedad rechazaba. Este proceso encontró una primera traducción en el realineamiento que la propia entrada de Kirchner produjo en el espacio piquetero, visible, por un lado, en la institucionalización e integración de las corrientes afines a

la tradición nacional-popular, dispuestas a apoyar la política del nuevo presidente; y por otro, en la oposición y movilización de las vertientes ligadas a la izquierda partidaria e independiente. Como consecuencia de ello, el proceso de reconfiguración del espacio piquetero fue mayor. Por un lado, a partir de 2003, asistimos al final de la alianza estratégica entre las dos grandes organizaciones territoriales, la Federación de Tierra y Vivienda, y la Corriente Clasista y Combativa, que habían liderado las luchas antineoliberales desde 1997. Por otro, el Bloque Piquetero Nacional, constituido por organizaciones ligadas a partidos de izquierda y agrupaciones independientes, y protagonista de grandes movilizaciones entre 2002 y 2004, sufrió un gran desgaste y debilitamiento, de cara al escenario de judicialización del conflicto y estigmatización mediático-social que se fue montando. Asimismo, las organizaciones ligadas a las corrientes autonómicas también conocieron una fuerte inflexión. Veamos algunos detalles de estas transformaciones.

El retorno de la tradición nacional-popular y el campo oficialista

La hipótesis de la integración e institucionalización comenzó a perfilarse tempranamente como una de las tendencias centrales del gobierno de Kirchner, alimentada por el accionar de ciertas organizaciones sociales que vieron en el nuevo presidente la posibilidad de un retorno a las “fuentes históricas” del justicialismo. Más aún, este nuevo giro del peronismo coincidió con la configuración de un nuevo escenario en América Latina, atravesado por la circulación de prácticas contestatarias y la emergencia de gobiernos de centroizquierda. En este marco, Hugo Chávez devino el nuevo modelo de referencia, en virtud de sus afinidades con la tradición nacional-popular argentina.

Es cierto que, anteriormente, en el campo piquetero algunas de estas agrupaciones ya habían manifestado una tendencia hacia la institucionalización (como la Federación de Tierra y Vivienda); otras más incipientes habían desarrollado un perfil más combativo (como la juvenil Barrios de Pie). Por su parte, Kirchner, desde el poder, se encargó de promover la creación de nuevas organizaciones sociales, entre ellas el Movimiento Evita, un frente de organizaciones territoriales de fuerte presencia en todo el país que retoma claramente la iconografía peronista.

Desde entonces, este conjunto de antiguas y nuevas organizaciones recibe un tratamiento privilegiado de parte del gobierno nacional, beneficiadas por los nuevos programas sociales, entre ellos el Plan Arraigo y Manos a la Obra, que contemplan la construcción de viviendas y el financiamiento de emprendimientos productivos. A partir de 2005, varios dirigentes piqueteros se incorporaron al gobierno, especialmente en secretarías ligadas a la acción social y comunitaria, a nivel nacional y provincial, como en la cancillería, lugar privilegiado para llevar a cabo un entrelazamien-

to de las acciones a nivel latinoamericano. En la actualidad, dichas organizaciones atraviesan una etapa de franca estatalización, compartiendo espacios de poder con intendentes y gobernadores anteriormente ligados a la época del menemismo o a lo más rancio del aparato del justicialismo, sectores con los cuales consideran que han entablado una disputa de poder².

Desde el punto de vista territorial, organizaciones como Barrios de Pie ampliaron su campo de acción, en particular a partir del programa nacional Promotores Territoriales para el Cambio Social, controlado desde el Ministerio de Desarrollo Social y concebido como una red de resolución de problemas. Al mismo tiempo, la organización buscó distanciarse de la "identidad piquetera", resignificada como una fase de la lucha cuya reivindicación se corresponde con el período de "resistencia al neoliberalismo". En este marco, la relectura hace hincapié en el abandono del piquete (corte de ruta) como estrategia de movilización, debido tanto al cansancio de los sectores medios como al acercamiento con el gobierno. De igual manera, el Movimiento Evita, al no poseer una historia piquetera previa, apuntó a construir su identidad en torno "de la militancia social y el trabajo de organización realizado en los barrios"³. Así, ambos movimientos reivindican una tradición más movimientista, autodefiniéndose como "organizaciones sociales", al tiempo que aspiran al desarrollo de un frente político más amplio, en el difuso espacio de la "transversalidad" impulsado por Kirchner al comienzo de su gobierno.

Dicha estrategia política sufrió empero varios reveses: por un lado, en 2007, en ocasión de las elecciones generales, el presidente Néstor Kirchner y su esposa y sucesora, Cristina Fernández de Kirchner, sellaron una alianza política con los sectores más conservadores del peronismo, así como con los llamados "radicales K"⁴. Por otro lado, el propio Kirchner, luego de la asunción de su esposa a la Presidencia, preparó su retorno a la dirección del Partido Justicialista, lo que se hizo efectivo en abril de 2008⁵. Ambas decisiones echaron por tierra la ilusión populista de aquellas organizaciones sociales que habían apostado a una suerte de cambio político "desde adentro" o la construcción de una especie de "transversalidad", más allá de la estructura rígida del partido. En este sentido, dichos grupos han tendido a sobreestimar la capacidad innovadora del gobierno de los Kirchner, al tiempo que resignaron toda independencia, como lo muestra la subordinación fiel a las consignas impartidas desde la Casa Rosada: así, las movilizaciones protagonizadas desde entonces tienen como antagonista a los sectores enfrentados con el gobierno (especialmente los sectores formadores de precios y los sectores agrarios).

Un devenir más azaroso parece haber tenido la Federación de Tierra y Vivienda, ligada a la suerte de su máximo referente, el

controvertido Luis D'Elía. Dicha organización sufrió varias rupturas en los últimos años, al tiempo que se vio enfrentada a la propia Central de Trabajadores Argentinos (CTA), de la cual forma parte, debido a las ambiciones del propio D'Elía, quien en 2003 vislumbró la oportunidad de alentar un proyecto propio, primero como candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires y, luego de su fracaso electoral, como funcionario del gobierno de Kirchner, desde la Subsecretaría de Tierras para el Hábitat Social, a la cual debió renunciar en 2006⁶. Estos intentos por capitalizar políticamente la larga historia de la FTV y su desarrollo comunitario terminaron en el fracaso, y lesionaron fuertemente a la organización, en gran medida porque las estrategias estuvieron subordinadas a un estilo de liderazgo personalista y no a un proyecto colectivo. Todo ello no significó, sin embargo, un alejamiento en relación al gobierno de los Kirchner, del que D'Elía aparece como uno de sus defensores públicos más acérrimos e incondicionales.

El campo de las organizaciones partidarias y autónomas

A la integración, institucionalización y progresiva estatalización de los grupos filopopulistas es necesario sumar la estrategia de disciplinamiento y criminalización que el gobierno de Néstor Kirchner aplicó sobre los grupos más movilizados, entre los que se encuentran las organizaciones ligadas a los partidos de izquierda, así como los grupos independientes y autónomos. Para ello, el gobierno nacional no dudó en alimentar la estigmatización de la protesta –contraponiendo la movilización callejera a la exigencia de “normalidad institucional”–, impulsando activamente la difusión de una imagen de la democracia supuestamente acosada por las agrupaciones piqueteras.

Poco importaba si las declaraciones gubernamentales daban cuenta de un vaivén peligroso que iba de la judicialización al reconocimiento de las necesidades de los desocupados, del cuestionamiento de la representatividad de las organizaciones a la afirmación del derecho legítimo a la protesta. La campaña de invectiva y descalificación verbal tuvo momentos de alto voltaje entre octubre de 2003 y agosto de 2005. Los esquemas maniqueos y las simplificaciones ganaron el lenguaje periodístico y apuntaron a reducir la experiencia piquetera a una metodología de lucha (el piquete), así como se multiplicaron los ataques contra las organizaciones, acusadas de asistencialismo (dependencia en relación al Estado por medio de los planes sociales) y hasta de nuevo clientelismo de izquierda. El resultado fue el efectivo avance de la judicialización, o entrega del conflicto a los tribunales, y la instalación de un fuerte consenso antipiquetero, sostenido y avalado por amplias franjas de la opinión pública.

Cierto es que los movimientos piqueteros también contribuyeron a esta situación de aislamiento y deslegitimación. Muy especial-

«Presentaremos las luchas de los movimientos campesinos e indígenas, las características de las nuevas asambleas socioambientales (contra la minería tóxica y las papeleras)»

mente, las organizaciones ligadas a los partidos de izquierda (que incluyen diferentes variantes del trotskismo) tuvieron serias dificultades para reconocer el cambio de oportunidades políticas (la demanda de normalidad) y la productividad política del peronismo, por lo que diagnosticaron que Kirchner representaba una pura continuidad respecto de los gobiernos anteriores. En consecuencia, y en un escenario de fuerte confrontación, tendieron a impulsar la movilización callejera, multiplicando los focos

de conflicto y, en última instancia, olvidando la vulnerabilidad de las bases y la gran asimetría de fuerzas y recursos existentes.

En este contexto, todas las organizaciones piqueteras opositoras al gobierno de Kirchner sufrieron procesos de fragmentación organizacional y, en un fuerte marco de reflujo de la acción en las calles, se

vieron obligadas a revisar sus estrategias de intervención política. Una de las organizaciones masivas que más sintió el debilitamiento del poder de convocatoria fue sin dudas la Corriente Clasista y Combativa, ligada al maoísmo, que luego de un período de hesitación, y habiendo aceptado el desarrollo de emprendimientos propuestos por el gobierno (sobre todo, la construcción de viviendas), optó por el pasaje a la oposición. Por su parte, las organizaciones ligadas al trotskismo (como el Polo Obrero) presentaron una fuerte línea de continuidad respecto del período anterior, en la medida en que buscaron subordinar la temporalidad propia de las organizaciones territoriales a lo político-partidario o, más recientemente, a lo político-electoral. Sin embargo, la distinción entre lo social-reivindicativo (el trabajo territorial, en sus diferentes aspectos) y lo estrictamente político (y ello por encima de sus definiciones) continúa siendo un elemento de debate y de reflexión presente en casi todas las organizaciones, dada la difícil coexistencia establecida, desde los orígenes mismos del accionar piquetero, entre la urgencia de las demandas y las aspiraciones de corte emancipatorio.

Por último, las estrategias de las organizaciones independientes fueron marcadamente heterogéneas, tanto debido a la ausencia de un posicionamiento único ante las políticas sociales desarrolladas por el gobierno como al desinterés en la creación de espacios de articulación política. Algunas de estas organizaciones, como el Movimiento Teresa Rodríguez, aceptaron incorporarse a los planes de autoconstrucción de viviendas y desarrollo de emprendimientos textiles (fábrica de guardapolvos) que propuso el gobierno de Néstor Kirchner, en un proceso que, si bien implicó logros, superó rápidamente la posibilidad de ajustar las lógicas (a la vez individuales y económicas) desarrolladas por las cooperativas de vivienda y las unidades textiles a la lógica (a la vez colectiva y política) propia del movimiento social.

Una de las organizaciones autónomas que mejor sorteó este período de reflujo y reconfiguración organizacional fue el Frente Darío Santillán, proveniente de la Coordinadora Aníbal Verón, espacio que tuviera un gran protagonismo y resonancia con las clases medias entre 2002 y 2003. En efecto, el Frente Darío Santillán rechazó los proyectos productivos propuestos por el gobierno (autoconstrucción y pequeñas fábricas textiles), pero al mismo tiempo continuó con aquellos emprendimientos ligados a la producción artesanal y autogestión (panaderías, huertas comunitarias, bloqueras). Desde una perspectiva política, apuntó a ampliar la acción hacia otros espacios –el frente campesino, estudiantil y sindical–, anudando fuertes lazos con movimientos campesinos –en especial con el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE). Al mismo tiempo, potenció la dimensión cultural del movimiento (creación de una editorial y una distribuidora cultural, entre otros), lo cual tornó ostensible la coexistencia y entrelazamiento novedoso del modelo del militante social con el del activista cultural. Por último, el movimiento extendió su plataforma discursiva, incorporando activamente la problemática relativa a la defensa de los recursos naturales. En contraposición, otro de los movimientos independientes más emblemáticos del período 1997-2003, el Movimiento de Trabajadores Desempleados (MTD) de Solano –expresión radical del autonomismo– entró en una etapa de visible declive, ligada tanto a la opción por un desarrollo territorial focalizado (la concentración en unos pocos emprendimientos productivos) como a una estrategia aislacionista y claramente desmovilizadora. Esto se tradujo en una significativa ausencia política en el plano regional y nacional, pese a su llamativa presencia en los foros internacionales alternativos.

En suma, una vez pasada la efervescencia social, y con ello el período de resonancia con las clases medias movilizadas, hacia mediados de 2004 las organizaciones piqueteras disidentes se encontraron en las calles con un importante nivel de aislamiento social, pero en un

contexto político bien diferente al de los años anteriores. Así, la inflexión fue triple. Por un lado, y de manera casi paradójica, la crisis de 2001-2002 otorgó al peronismo una nueva oportunidad histórica, permitiéndole dar un enorme salto a partir de la masificación de los planes asistenciales. Así, los dispositivos del clientelismo afectivo se potenciaron, asegurando tanto la posibilidad de la reproducción del peronismo “desde abajo” como el cierre de la brecha disruptiva abierta por las organizaciones piqueteras. Por otro lado, más allá de la masificación, la política social continuó en la misma línea que las anteriores, esto es, basada en la fragmentación y la focalización de la ayuda social, lo cual terminó por consolidar la matriz asistencial. Por último, el corrimiento de los conflictos sociales hacia la matriz sindical y la explosión de conflictos socioambientales volvieron a colocar un velo de indiferencia e invisibilidad sobre el accionar de las organizaciones piqueteras, en su gran parte debilitadas, encapsuladas en el trabajo territorial de los barrios y con escasas posibilidades de hacer escuchar sus reclamos.

Sin embargo, la dificultad por suscitar adhesiones y aliados importantes por fuera del campo militante no fue exclusiva responsabilidad del gobierno nacional, de los medios de comunicación o de la mirada racista y unidimensional que adoptó gran parte de la sociedad argentina. Hacia adentro, necesario es decirlo, asistimos a una potenciación mayúscula de las divergencias existentes entre las diferentes vertientes político-ideológicas, esto es, el pasaje de la cooperación al conflicto. En este contexto, los movimientos piqueteros críticos y antisistémicos se vieron muy debilitados y debieron resignar la centralidad que, hasta 2004, tuvieron en la cartografía argentina de las resistencias. Asimismo, las organizaciones oficialistas tendieron a expandirse y multiplicar sus intervenciones, pese a que su presencia en el plano de la recomposición del nuevo poder peronista continúa siendo marginal.

Finalmente, lo sucedido entre 2003 y 2005 dejó planteado como desafío no sólo la importancia de la disputa cultural y simbólica en un escenario de agudización de los conflictos sociales, sino también la urgencia de reflexionar acerca de cómo tender puentes y generar articulaciones entre los elementos más positivos y aglutinantes de las diferentes vertientes de la izquierda –la tradición nacional-popular, la tradición marxista clásica y la narrativa autonomista– que recorren y desbordan del espacio piquetero, atravesando el conjunto del campo militante.

El corrimiento del conflicto: sindicalismo y precariedad

Mientras la política gubernamental tendía a sellar las fronteras de la exclusión, las fronteras de la precariedad comenzaron a mostrarse más flexibles y porosas, revelando un mayor protagonismo del extenso mundo de traba-

jadores, sindicalizados y precarios. En efecto, a partir de 2004, el contexto de crecimiento económico sin redistribución y con un fuerte aumento de la precariedad marcó el retorno de la conflictividad sindical, de la mano de la tradicional Confederación General del Trabajo (CGT), luego de una década de desmovilización y de una reorientación hacia un sindicalismo de tipo empresarial. Desde 2004, la CGT se encuentra unificada bajo el liderazgo de Hugo Moyano, jefe del sindicato de los camioneros, quien durante los años noventa encabezó el Movimiento de los Trabajadores Argentinos (MTA), nucleamiento sindical peronista que osciló entre la crítica a la CGT oficialista y la colaboración con la CTA. Durante los años de la gestión de Kirchner, en un escenario más bien segmentado y fuertemente corporativista, el vínculo entre la CGT y el gobierno se desarrolló en el marco del estilo peronista tradicional: a saber, entre la afirmación de la dependencia política y la apelación a la fuerte capacidad de presión.

Por su parte, la CTA, que nuclea sobre todo a trabajadores del sector público y cuyas dificultades actuales son evidentes, pareciera no haber encontrado una política coherente respecto del gobierno. Esta agrupación, que en los noventa desempeñó un papel aglutinador y contestatario, se ha visto muy desdibujada debido a las divergencias internas, dado que incluye a conocidos dirigentes que simpatizan con la política oficial. Por otro lado, pese a las promesas de Néstor Kirchner y su sucesora, Cristina Fernández de Kirchner, el gobierno continúa sin otorgar a la central la personería gremial exigida.

En el marco del aumento de la conflictividad sindical, no han sido pocas las luchas protagonizadas por comisiones internas, en ciertos casos por fuera de la dirigencia de los sindicatos o de las centrales reconocidas. Entre estos actores se destaca el sector de servicios y transporte (empresas de *call center*, subterráneos de Buenos Aires). Otros conflictos sindicales de base que tuvieron gran resonancia fueron protagonizados por el sector público (educación y salud). Desde las huelgas de los hospitales públicos, amenazados por el desguace, hasta los persistentes paros del sector docente (enseñanza primaria y secundaria) en varias provincias, dichos conflictos han puesto de manifiesto el deterioro salarial y la ampliación de las fronteras de la precariedad, en una época de prosperidad económica. El asesinato de un docente en la provincia patagónica de Neuquén (abril de 2007) a manos de la policía provincial y las constantes pujas en otras provincias revelaron la ausencia de propuestas integradoras en torno a la recuperación y revaloración de lo público, así como la dificultad de los propios sindicatos para nacionalizar los conflictos.

Sin embargo, estos conflictos de base han ido configurando la emergencia de una militancia sindical, que viene ensayando

«Estos conflictos de base han ido configurando la emergencia de una militancia sindical, que viene ensayando nuevas experiencias de coordinación»

nuevas experiencias de coordinación. Un ejemplo lo constituye el Movimiento Intersindical Clasista, que se formó en diciembre de 2005 y reúne una izquierda basista, proveniente tanto del sector público como del transporte (subterráneos). Otro caso es la Coordinadora de Trabajadores Precarios, conformada por jóvenes trabajadores de *call center*, encuestadores y becarios universitarios. Estos trabajadores, en su mayor parte provenientes de servicios caracterizados por el trabajo

flexible y en negro, optaron por atravesar un camino organizativo propio.

Una de las características de dicha experiencia refiere a una acción militante externa, esto es, que el desarrollo de una estrategia de resistencia (y por ende de construcción del sentido de la precariedad) parte de las instancias de coordinación, y no desde el propio lugar de trabajo⁷.

Asimismo, en términos tanto generacionales (jóvenes) como de ethos militante, la dinámica de dichos espacios de coordinación presenta una afinidad mayor con los colectivos de los movimientos alter-globalización, que podemos hallar en otras latitudes (Europa), ligados a la problemática de la precariedad. Así, sus acciones se insertan más en la lógica de los movimientos sociales que en el registro sindical tradicional.

Frente a la ausencia de control y regulación estatales que se advierte en las más diversas esferas, la problemática de la precariedad se ha venido manifestando bajo diferentes formas. Así, uno de los hechos que sacudió el país fue la muerte de 194 jóvenes en un incendio ocurrido en una discoteca (República de Cromañón) en la ciudad de Buenos Aires. Aunque el local tenía capacidad para 1.200 personas, en el momento del siniestro –diciembre de 2004– había más de 4 mil jóvenes. El hecho se constituyó en la trágica ilustración de un modelo socioeconómico excluyente, dejando a la vista una trama de corrupción empresarial y complicidad estatal, así como la vulnerabilidad y desprotección de la vida de los más jóvenes.

Desde un comienzo, los familiares y sobrevivientes de esta tragedia se organizaron, exigiendo que la justicia actuara sobre los responsables directos e indirectos. La presión de estos, así como las investigaciones efectuadas, terminaron con la destitución de Aníbal Ibarra, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, por “mal desempeño de sus funciones”, ocurrida en marzo de 2006.

Pero el efecto Cromañón presenta la particularidad de combinar dos dimensiones: por un lado, como movimiento social inscribe su lógica de acción en un tipo de lucha contra la impunidad, pese al escaso apoyo obtenido por parte de los organismos tradicionales de derechos humanos, hoy vinculados al gobierno. Por otro, como hecho social, produjo una conmoción en la sociedad que desembocó en la desnaturalización de la precariedad. Esto se ha venido expresando en diferentes protestas (corte de calles), que tienen como protagonistas a estudiantes secundarios y vecinos que denuncian la precariedad (en términos de infraestructura, de aumento de la inseguridad, de ausencia de control estatal) como algo anormal e insoportable, e interpelan la responsabilidad del Estado. Dichas demandas pueden sintetizarse en una consigna contundente: “No queremos otro Cromañón”, que de alguna manera revela la instalación de un nuevo umbral desde el cual pensar ciertos hechos, antes vividos como catástrofes naturales o simplemente como tragedias inevitables.

Por último, recordemos que en la Argentina existe un importante movimiento de fábricas recuperadas y autogestionadas por los trabajadores, que involucran a unas 12 mil personas. En los últimos años, las fábricas recuperadas entraron en una etapa de fragmentación organizacional. Afirma Julián Rebón (2007):

El gobierno de Kirchner intervino en algunos casos puntuales, pero nunca incorporó la recuperación como una política de Estado, en especial, en lo que se refiere a la cuestión de la propiedad. Las expropiaciones temporarias (sólo en la ciudad capital y en la provincia de Buenos Aires existen algunos procesos de expropiaciones definitivas) se debieron a legislaciones provinciales y/o locales. Precisamente la inexistencia de una política nacional de expropiación llevó a que la suerte de las empresas recuperadas tienda a quedar sujeta a la voluntad del gobierno local, la discrecionalidad de los jueces y avatares de ese proceso.

Por esta razón, varias fábricas recuperadas continúan amenazadas de desalojo, una vez pasado el período de cesión o *comodato*. Tal es el caso de los

trabajadores de FASINPAT (Fábrica sin patrones, ex Zanon), ubicada en el norte de la Patagonia, quizá la experiencia más resonante –por su carácter antagonista– del movimiento de fábricas recuperadas, y con múltiples lazos con el resto del campo militante.

En suma, la dinámica de los conflictos abiertos por la precariedad y las nuevas formas de exclusión vinculadas al actual modelo de acumulación presagia escenarios inestables y un incremento de las movilizaciones. Sin embargo, estas acciones contestatarias se desarrollan en un marco de extrema fragmentación organizacional, ausencia de instancias duraderas de articulación política y un fuerte poder integrador por parte del gobierno. Así las cosas, las organizaciones piqueteras y las nuevas formas de acción sindical enfrentan dos desafíos mayores: por un lado, la búsqueda de un horizonte de superación del actual contexto de fragmentación; por otro, la necesidad de repensar los cambios recientes operados en el heterogéneo mundo de las clases subalternas, en un país en el cual los movimientos sociales y las izquierdas antisistémicas siempre han tenido enormes dificultades para articular políticas conjuntas y convertirse, por ende, en grandes movimientos políticos.

Las luchas por la tierra y el territorio. Las fases del modelo neoliberal

En los últimos veinte años, el impulso del capitalismo neoliberal ha conocido diferentes fases en América Latina: un primer momento, en los noventa, marcado por la desregulación económica, el ajuste fiscal, la política de privatizaciones (de los servicios públicos y los hidrocarburos), así como por la introducción generalizada de los agronegocios (los cultivos de transgénicos mediante la siembra directa). Como afirma Boaventura de Sousa Santos (2007), estas transformaciones confirmaron el carácter meta-regulador del Estado, esto es, un Estado que emerge como “entidad responsable de crear el espacio para la legitimidad de los reguladores no estatales”. Esto implicó la generación de nuevas normas jurídicas que garantizaron la institucionalización de los derechos de las grandes corporaciones y la aceptación por parte de los estados nacionales de dicha normativa creada en los espacios transnacionales.

En 1994, la Argentina realizó una reforma constitucional que significó un cambio profundo en relación a la explotación de los recursos naturales; por un lado, marcó la renuncia del Estado nacional a la propiedad de los mismos y consagró su provincialización (gas, petróleo, minería); por otro, dio paso a una obligada privatización al excluir al Estado (provincial o nacional) de cualquier tipo de explotación. En este marco, las grandes empresas transnacionales fueron conformando enclaves de explotación que abarcaron, en primer lugar, la explotación de los hidrocarburos,

«En el marco del aumento de la conflictividad sindical, no han sido pocas las luchas protagonizadas por comisiones internas, en ciertos casos por fuera de la dirigencia de los sindicatos o de las centrales reconocidas»

y posteriormente fueron incluyendo la expansión de las fronteras mineras y energéticas. Asimismo, el proceso de privatización trajo consigo el desmantelamiento de la red de regulaciones que garantizaban un lugar a las economías regionales dentro de la economía nacional. La nueva política se tradujo en una manera diferente de concebir el espacio geográfico nacional, que desplazó la idea de un modelo global de territorio subsidiado desde el Estado nacional por la de "territorio eficiente". En consecuencia, la viabilidad o inviabilidad

de las economías regionales pasó a medirse en función de la tasa de rentabilidad.

En la actualidad, el capitalismo neoliberal en América Latina atraviesa una segunda fase, caracterizada por la generalización de un modelo extractivo-exportador que apunta a consolidar y ampliar aún más las brechas sociales entre los países del Norte y el Sur,

en base a la extracción de recursos naturales no renovables. La minería a cielo abierto, la construcción de megareservas, los proyectos previstos por la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA)⁸ y prontamente los agrocombustibles (etanol) ilustran a cabalidad esta nueva división del trabajo. En términos de D. Harvey, la actual etapa de expansión del capital puede ser caracterizada como de "acumulación por desposesión"⁹, proceso que produjo nuevos giros y desplazamientos, colocando en el centro de la disputa la cuestión acerca del territorio y el medioambiente. La presente etapa también aparece asociada a nuevos mecanismos de desposesión, como la biopiratería o la apropiación de formas culturales y cultivos tradicionales pertenecientes a los pueblos indígenas y campesinos.

No es casualidad entonces que en este escenario de reprimarización de la economía, caracterizado por la presencia desmesurada de grandes empresas transnacionales, se hayan potenciado las luchas ancestrales por la tierra, de la mano de los movimientos indígenas y campesinos, al tiempo que

han surgido nuevas formas de movilización y participación ciudadana, centradas en la defensa de los recursos naturales, la biodiversidad y el medioambiente –todo lo cual va diseñando una nueva cartografía de las resistencias. Estos conflictos se insertan en una dinámica multiescalar, en la que “lo global” y “lo local” se presentan como un proceso en el que se cristalizan, de un lado, alianzas entre empresas transnacionales y estados que promueven un determinado modelo de desarrollo y, de otro, resistencias de las comunidades locales que no comparten tal modelo ni los estilos de vida que éste impone. En el marco de dichos procesos, la construcción de un lenguaje sobre la territorialidad se ha venido cargando de nuevas significaciones y valoraciones, a partir del rechazo a una concepción eficientista e instrumental que exhiben tanto los gobiernos como las empresas transnacionales y determinados actores locales. En la Argentina, tanto la expansión del modelo sojero como del de la minería metálica a gran escala podrían pensarse como un ejemplo paradigmático en el cual una visión de la territorialidad se presenta como excluyente de las existentes (o potencialmente existentes), generando una “tensión de territorialidades” (Porto Gonçalves, 2001). Así, la definición de lo que es el territorio y, de manera más general, de cuál es el modelo de desarrollo viable, tiende a convertirse en el *locus* del conflicto.

Seguidamente, buscaremos dar cuenta de las diferentes movilizaciones y movimientos sociales que se desarrollan bajo esta lógica del conflicto.

Mercantilización, nuevo modelo agrario y luchas por la tierra

Desde fines de los noventa, la expansión del modelo sojero, caracterizado por el uso de las nuevas tecnologías de acuerdo a estándares internacionales (semillas transgénicas mediante la siembra directa), colocó a la Argentina como uno de los grandes exportadores mundiales de cultivos transgénicos. Su vertiginoso desarrollo implicó una reestructuración global del sistema agrario tradicional, que ya arrastraba una fuerte crisis, agravada por la política excluyente de los años noventa. Sin embargo, su éxito inicial no sólo está relacionado con el agotamiento del modelo anterior, sino también con su capacidad relativa de articular diferentes actores económicos: mientras que en el sector semillero aparecen las grandes empresas multinacionales (como Monsanto y Cargill) y unos pocos grandes grupos económicos locales, en el circuito de producción surgen otros actores económicos, entre ellos los “terceristas” (los que cuentan con el equipamiento tecnológico), los “contratistas” (suerte de “productores sin tierra”, entre los cuales se incluyen los *pools* de siembra y los fondos de inversión) y, por supuesto, los pequeños y medianos propietarios, muchos de ellos rentistas.

La contracara de dicho proceso ha sido tanto la potenciación como la emergencia de problemáticas económicas, sociales y ambientales. Así, por ejemplo, entre 1988 y 2002, desaparecieron 103.405 establecimientos agrarios en el nivel nacional. A la reducción del número de explotaciones es necesario agregar el incremento de la superficie media, que pasó de 243 a 587 hectáreas. Según el Grupo de Estudios Rurales (GER, 2004: 112), las técnicas de siembra directa disminuyeron entre un 28 y un 37% el uso de mano de obra, lo que generó un fuerte éxodo de la población rural. Por otro lado, el aumento de la rentabilidad viene acompañado por el avance de la deforestación, el uso masivo de agrotóxicos y una tendencia al monocultivo. A esto debemos sumar lo que supone la sojización del modelo productivo en términos de renuncia de la soberanía alimentaria; o, en otro nivel, de posibilidad de independencia y desarrollo tecnológico, vista la tendencia a exportar sólo productos primarios (*commodities*) y no productos con mayor valor agregado. Por último, la instalación y expansión del nuevo modelo agrario trajo consigo el desplazamiento de poblaciones y las amenazas de desalojos para las comunidades campesinas, sobre todo en la llamada “frontera agrícola” (las áreas marginales), como en las provincias de Santiago del Estero y Salta.

En el marco de la hegemonía del modelo sojero, han venido desarrollándose variadas formas de resistencia, en especial de la mano de movimientos campesinos, cuya acción va delineando “la tensión existente entre una agricultura industrial y una agricultura campesina o familiar” (Domínguez et al., 2007: 239-246). Uno de los movimientos campesinos de mayor trayectoria es el MOCASE, en la provincia de Santiago del Estero, que surgió en 1985 y cuenta con unas 9 mil familias organizadas, tanto por el tema de la tierra como por la comercialización de sus productos. En un contexto de expansión de la frontera agrícola, la acción del MOCASE no resulta nada fácil. Desde hace años, la organización es permanentemente hostigada por las guardias “paramilitares” de los grandes terratenientes, así como por la judicialización de los conflictos en torno a la propiedad de la tierra. Recordemos que, aunque muchos campesinos no cuentan con los títulos de las tierras, la reforma constitucional de 1994 incorporó el reconocimiento al derecho veintañal, abriendo con ello la posibilidad de titularización de las tierras a indígenas y campesinos.

De manera más reciente, también en otras provincias se han venido desarrollando movimientos campesinos que luchan contra el avance de la soja y por la titularidad de las tierras. Tal es el caso del Movimiento Campesino de Córdoba y del Movimiento Campesino de Formosa (MOCAFOR), este último incorporado desde hace varios años a la CTA. Asimismo, dichas organizaciones, que conforman hoy el Movimiento

Nacional Campesino e Indígena, han sido objeto de las políticas sociales del gobierno de Kirchner. Desde 2006, participan en el Programa Social Agropecuario, que depende de la Secretaría de Agricultura, lo que sin embargo no ha conllevado ningún cambio de estatus en relación con la tenencia de la tierra (Giarracca, 2007).

La problemática de la lucha por la tierra presenta dimensiones más dramáticas, si hacemos referencia a las organizaciones y pueblos indígenas. Entre ellas, las comunidades Kolla, Mapuche, Wichí, Toba y Ava Guaraní han protagonizado en años recientes una sostenida resistencia a los desalojos y, al mismo tiempo, no abandonaron su lucha por alcanzar la propiedad legal de las tierras que ocupan. Una de las regiones más afectadas es la Patagonia, donde actualmente se lleva a cabo un proceso de reprivatización de la tierra que implica la expansión de ambiciosos proyectos de explotación hidrocarburífera, mineros, energéticos, forestales y turísticos. El desarrollo de estos megaemprendimientos afecta sobre todo a las comunidades mapuches. Uno de los casos más conocidos es la contaminación del yacimiento petrolero de Loma de la Lata, en manos de Repsol-YPF, donde las comunidades Kaxipayiñ y Paynemil presentan niveles de intoxicación alarmantes por la acumulación de más de diecisiete metales pesados en sus tejidos. Desde hace años la cuestión se debate en la Corte Iberoamericana de Derechos Humanos. Asimismo, la expansión de la frontera energética abrió otros frentes de conflicto, entre los cuales se destaca el proyecto que prevé crear seis represas sobre el río Corcovado (situado a 100 kilómetros de Esquel, en Chubut), que ha generado la resistencia de la comunidad mapuche Pillan Mahuiza, cuyas tierras quedarían inundadas con la construcción.

Otro de los conflictos más resonantes es el que enfrentan las comunidades mapuches y la corporación italiana Benetton, convertida en el mayor latifundista de la Argentina, con 900 mil hectáreas en la región. Así, se han dado numerosos casos de recuperación comunitaria de tierras en las provincias de Neuquén (con el apoyo de la Coordinación de Organizaciones Mapuche y el Consejo Asesor Indígena-CAI) y Río Negro (con el respaldo de la Ruka Mapuche). Muchos de estos casos han entrado en la vía de la judicialización, pese a que la Constitución Argentina, reformada en 1994, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos originarios a la formación de los propios estados, así como su derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras tradicionalmente ocupadas. Asimismo, en noviembre de 2006, se aprobó la Ley de Emergencia de la Propiedad Comunitaria Indígena, que frena por cuatro años los desalojos de comunidades, con el propósito de relevar –en vistas a regularizar– la situación territorial de las comunidades originarias existentes en el país, a

finés de garantizar el control de los bienes de la naturaleza por parte de los pueblos originarios (Agosto y Briones, 2007).

La expansión de los movimientos socioambientales. Las asambleas contra la minería tóxica¹⁰

Las reformas realizadas durante los años noventa resultaron cruciales para la reorganización y futura expansión del modelo extractivo-exportador. En lo que respecta al sector minero, se establecieron condiciones leoninas para la explotación. Así, en primer lugar, este conjunto de medidas consistió en la autoexclusión del Estado y el otorgamiento de beneficios y exenciones al capital transnacional, algunos de los cuales son: estabilidad fiscal por treinta años, exención del pago de los derechos de importación, deducción del 100% de la inversión en el impuesto a las ganancias, exención del pago del canon por tres años para el descubridor del yacimiento. Y finalmente, en cuanto al pago de regalías, se estableció un porcentaje máximo del 3% al valor boca mina declarado por la empresa (del que se descuentan los costos que implica el proceso desde su extracción hasta el traslado para la exportación), así como la no obligación de liquidar divisas en el país.

En segundo lugar, la construcción de un andamiaje legal fue acompañada desde el Banco Mundial mediante el Programa de Asistencia a la Minería Argentina (PASMA), cuyo principal objetivo consistió en realizar reformas regulatorias e institucionales tendientes a alentar la inversión privada en minería. El proyecto, que tuvo una duración de seis años (1995-2001), se ejecutó a nivel del Estado nacional y seis provincias. Posteriormente se llevó adelante la segunda fase, que incluyó esta vez a diecisiete provincias. Entre los componentes del proyecto se encuentran el desarrollo del marco institucional, el sistema de catastro y registro minero, el manejo ambiental y el sistema unificado de información minera.

Por último, se implementó también una legislación de "facilitación fronteriza" para que los límites entre países y sus consecuentes incumbencias no fueran un impedimento para la explotación a ambos lados de la cordillera de Los Andes. El Tratado de Integración y Complementación Minera con Chile, firmado en julio de 1996, rige la explotación integrada de yacimientos compartidos por los dos países. A partir de dicho instrumento, el tránsito de bienes pero también de personas deja de ser regulado por los estados. De esta manera, se configura un territorio donde se desdibujan las fronteras y se genera una legalidad propia a los intereses mineros. En el marco de este tratado, el primer proyecto a desarrollarse se denomina Pascua-Lama, localizado en ambos lados de la cordillera, para el caso argentino en la provincia de San Juan.

«La definición de lo que es el territorio y, de manera más general, de cuál es el modelo de desarrollo viable, tiende a convertirse en el *locus* del conflicto»

En este marco, y al igual que en otros países latinoamericanos como Perú, Ecuador y Guatemala, se fueron generando una serie de movilizaciones socioambientales contra la minería tóxica. Estos movimientos, conocidos como asambleas de vecinos o de autoconvocados, se sitúan en pequeñas y medianas localidades de la zona cordillerana y precordillerana de varias provincias. En la Argentina, uno de los casos pioneros y emblemáticos fue el conflicto que mantuvo la

población de Esquel, ubicada en una provincia patagónica, contra la empresa minera canadiense Meridian Gold. Gracias al alerta dado por técnicos y ambientalistas de la región, la comunidad de Esquel se movilizó contra la explotación de una mina de oro a cielo abierto, riesgosa para la salud y el medioambiente. Asimismo,

siguiendo los pasos de Tambogrande¹¹, los vecinos autoconvocados organizaron un plebiscito, en marzo de 2003, que arrojó un rotundo “no” a la minería tóxica, reuniendo al 81% de la población. Posteriormente, en 2006, la empresa minera intentó judicializar el conflicto al querellar a seis asambleístas de Esquel por “violación de secretos empresariales”. Sin embargo, el “efecto Esquel” tuvo un arrastre multiplicador, despertando a otras regiones en las que ya se habían implantado o se proyectan emprendimientos mineros de gran envergadura, que involucran a conocidas multinacionales. Así, en la actualidad existen más de cincuenta asambleas contra la minería tóxica, en más de nueve provincias argentinas. En todos los casos, la composición de dichas movilizaciones refleja un carácter heterogéneo y multisectorial, con una marcada presencia de las clases medias, y en muchos casos de sectores profesionales (docentes, técnicos y otros), encargados de proponer/elaborar un saber contra-experto, a fin de confrontar con el discurso dominante.

Al compás de la explosión de los conflictos socioambientales, las asambleas se han orientado a la conformación de una “red de territorios”

que dio origen a diversos colectivos de organizaciones, entre ellas la Asamblea Coordinadora Patagónica, Asamblea Comarcal, Asamblea Regional No a Pascua Lama y Plenario de Organizaciones del NOA (noroeste argentino). Estas asambleas regionales integran la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), que desde 2006 funciona con el objetivo de potenciar las luchas de las comunidades. El carácter asambleario de la UAC (que ha realizado ya seis encuentros nacionales) refleja empero las dificultades de construir instancias de segundo grado, que potencien los antagonismos existentes en función de una lógica de acumulación política. Sin embargo, pese a sus dificultades, la UAC se ha convertido en un lugar de intercambio de experiencias y, por ende, de ampliación de las demandas, entre las cuales se incluye una incipiente y progresiva afinidad valorativa con la cosmovisión de los movimientos campesinos e indígenas, históricamente invisibilizados y relegados al margen de la sociedad. De hecho, el Movimiento Campesino e Indígena ha participado de los últimos dos encuentros.

Estos conflictos socioambientales tienen lugar en el marco de un entramado complejo, en el cual se encuentran involucrados diferentes actores sociales, económicos y políticos en el nivel local, regional, estatal y global. En este sentido, cabe señalar que la multiescalaridad suele combinarse perversamente con una tipología muy expandida en América Latina: *las economías de enclave*. Así, estos emprendimientos suelen encontrar un contexto favorable en aquellas regiones caracterizadas por una matriz social más jerárquica y escasamente diversificada desde el punto de vista económico, en la que imperan gobiernos provinciales y municipales de bajísima calidad institucional y sobreabunda el empleo estatal¹². En este contexto, las asimetrías propias de la dinámica entre lo local (las asambleas de autoconvocados) y lo global (empresas multinacionales) tienden a exacerbarse: las movilizaciones suelen ser más erráticas y la vulnerabilidad del colectivo, mayor. Esta realidad parece ajustarse a varias provincias del noroeste argentino, como La Rioja, San Juan, Salta, Catamarca y Tucumán. El paradigma lo constituye sin duda la provincia de San Juan, actualmente gobernada por un dirigente peronista que fuera el encargado de promover la ley minera en los años noventa, quien posee intereses económicos en el sector. Así, en Calingasta, una de las localidades más afectadas de la provincia, las diferentes tentativas por llevar a cabo un referéndum con relación al tema de la minería han fracasado. La suspensión del plebiscito en tres oportunidades reafirma el compromiso del Estado provincial y su alianza con las empresas transnacionales para garantizar la expansión de la actividad minera en dicha región. Asimismo, a fines de 2007, la Legislatura de esa provincia sancionó un nuevo régimen contravencional que establece la pena de treinta días de cárcel o trabajo comunitario a todo aquel “que

anunciando desastres, infortunios o peligros inexistentes provoque alarma en lugar público o abierto al público, de modo que pueda llevar intranquilidad o temor a la población" (ver <www.noalamina.org>), en un evidente intento por acallar la resistencia contra la minería a cielo abierto.

Muy diferente es el caso de aquellas otras provincias que cuentan con un fuerte tejido social y una economía más diversificada, como Mendoza y Córdoba. Así, en 2007, presionada por las movilizaciones socioambientales, la Legislatura de Mendoza aprobó una ley contra la minería tóxica, y la provincia de Córdoba, con todos sus vaivenes, se apresta actualmente a seguir sus pasos. Asimismo, en las provincias patagónicas, la existencia de una matriz social más abierta y la presencia de una población de tipo aluvional favorecieron el rápido proceso de empoderamiento de los movimientos, tal como lo demostró el caso de Esquel, y posteriormente las provincias de Río Negro y La Pampa, que rápidamente se plegaron a sancionar una normativa que prohíbe el desarrollo de este tipo de minería.

Por otro lado, la posibilidad de éxito de las movilizaciones socioambientales también está ligada a otro tipo de factores: por ejemplo, a la etapa de realización en la cual se encuentra el proyecto (prospección, exploración o explotación). Así, la mayor parte de las acciones exitosas se refieren a proyectos mineros que se encontraban en una etapa de prospección o exploración. Muy diferente es el caso de las acciones de resistencia una vez que el emprendimiento se encuentra en una fase de explotación y desarrollo. El caso más emblemático es el de la minera La Alumbra, instalada desde 1997 en Andalgalá, provincia de Catamarca, que cuenta con un mineraloducto de más de 200 kilómetros de extensión, que comunica el yacimiento con la ciudad de Tucumán. En los últimos años, han sido numerosas las denuncias de contaminación a causa de la rotura de dicho mineraloducto. En un contexto de economía de enclave, la acción económica y social de la empresa tiende a acallar toda disonancia. En todo caso, a once años de la instalación del primer proyecto de minería a cielo abierto en el país, resulta posible establecer de manera cierta cuáles fueron los impactos sociales, económicos y ambientales. Frente a ello, y por primera vez en la Argentina, en el mes de junio de 2008, la justicia falló en contra de una minera, haciendo responsable a La Alumbra por graves daños ambientales.

Asimismo, el éxito de estas acciones de resistencia depende del sistema de oportunidades políticas. Un caso relevante es el de la provincia de La Rioja, donde desde hace más de un año las asambleas de Chilecito y Famatina realizan un corte que impide el acceso de la empresa Barrick Gold (una de las compañías mineras más grandes del mundo, de origen canadiense) al territorio en el que se proponía iniciar la etapa de

«nada parece indicar que la actual gestión de Cristina Fernández de Kirchner vaya a orientarse hacia una discusión acerca del modelo de desarrollo»

exploración. A mediados de 2007, las acciones de lucha encontraron una novedosa oportunidad política, a raíz de un conflicto interno dentro del Partido Justicialista provincial, que derivó en el desplazamiento del gobernador. En el marco de la crisis política, el gobernador sustituto sancionó por decreto una ley que prohíbe la minería contaminante. Sin embargo, una vez consolidado por la vía electoral, éste buscó limitar el alcance de la ley, que hasta el día de hoy no ha entrado en vigor.

Por último, no olvidemos que, desde la órbita del gobierno nacional, se ha venido confirmando la continuidad del modelo minero¹³, y nada parece indicar que la actual gestión de Cristina Fernández de Kirchner vaya a orientarse hacia una discusión acerca del modelo de desarrollo, en lo que se refiere a la explotación de los recursos naturales y el rol de las grandes empresas transnacionales, frente a un contexto optimista en términos de inversiones extranjeras.

La Asamblea Ambientalista de Gualeguaychú

Uno de los conflictos socioambientales más resonantes es sin duda el de Gualeguaychú (provincia de Entre Ríos), donde los vecinos se movilizaron en contra de la instalación de dos papeleras, Botnia y Ence, de origen transnacional. A diferencia de otros reclamos socioambientales, como el de las mineras, el conflicto por las pasteras añade un registro para nada suplementario, al involucrar a dos países vecinos y traer por ende al primer plano cuestiones referidas a la soberanía estatal.

Dicho conflicto se retrotrae al año 2003, cuando el gobierno uruguayo, bajo la presidencia de Jorge Batlle, aprobó la construcción de dos plantas papeleras en la costa del río Uruguay, que dicho país comparte con Argentina. Recordemos que, desde fines de los ochenta, impulsado por el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Uruguay apostó al desarrollo del modelo forestal, cuyo destino no era otro que la industria papelera internacional (ver

Giarracca, 2007). Lo cierto es que, mientras del lado uruguayo se desoyeron las voces que advertían sobre la extensión del monocultivo del eucalipto, del lado argentino se ignoraron también las advertencias de las organizaciones ambientalistas frente a la amenaza de contaminación que podrían producir ambas plantas papeleras (Bergel, 2006). Pese a ello, a ambos lados del río Uruguay, las organizaciones ambientalistas continuaron realizando una intensa campaña de difusión y alerta en la población. Asimismo, el Frente Amplio uruguayo, que durante su campaña electoral se había manifestado en contra de la construcción de las papeleras, una vez en el gobierno optó por apoyar su instalación.

El 30 de abril de 2005 se realizó una enorme movilización que culminó con el “abrazo al río Uruguay”, que se constituyó en el acta de nacimiento de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú. Del lado argentino, entre 2005 y 2006 se realizaron intensas movilizaciones que incluyeron largos cortes de los pasos fronterizos que unen ambos países. Los asambleístas autoconvocados lograron, de este modo, mediante una protesta pacífica que conjugaba la desobediencia civil con la democracia asamblearia, colocar el conflicto en la agenda política nacional e internacional. En ese marco de internacionalización del conflicto, la empresa Ence decidió cambiar la zona de emplazamiento de la pastera. No así Botnia, compañía de origen finlandés, que optó por continuar las obras para finalmente entrar en funcionamiento a mediados de 2007.

El conflicto desembocó en dos querellas: la primera, ante el tribunal internacional de La Haya, ante el cual la Argentina radicó una denuncia por amenaza de contaminación, y cuyo juicio definitivo todavía está pendiente. La segunda fue una causa abierta en el tribunal del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), ante la presentación de Uruguay, que denunció la ilegalidad de los cortes de los puentes fronterizos. Por su parte, desde principios de 2007, frente a la falta de respuesta de las autoridades, la Asamblea de Gualeguaychú retomó el corte del puente internacional por tiempo indefinido, tensando enormemente la relación entre ambos países.

El impacto de la Asamblea Ambientalista de Gualeguaychú está vinculado tanto a la duración de la protesta como a su carácter masivo: mujeres y hombres de todas las edades, mayoritariamente pertenecientes a las clases medias, han venido recorriendo un largo camino que se tradujo tanto en un empoderamiento político como en una ampliación del horizonte respecto de la complejidad de los problemas socioambientales. En este sentido, la experiencia de Gualeguaychú representa el pico más alto de la corta historia asamblearia de la Argentina; sin embargo, también ha sido la experiencia que más rápidamente mostró sus límites. Así,

desde un comienzo, la asamblea buscó diferenciarse de los desocupados (piqueteros), rechazando el mote de “neopiqueteros” que le adjudicaba tanto la prensa argentina como uruguaya. Pero los límites de Gualeguaychú no residen tanto en su carácter de clase o en su marcada autorreferencialidad (muy probablemente, debido a la sobreexposición frente a los medios de comunicación), sino más bien en el hecho de haber desarrollado una fuerte matriz nacionalista. La intervención del presidente argentino, Néstor Kirchner, en apoyo a la asamblea (en clave de “Causa Nacional”), y la respuesta no menos virulenta de su par uruguayo, Tabaré Vázquez, resultaron cruciales en dicha inflexión nacionalista. Por un lado, el enfrentamiento entre los dos gobiernos sirvió para reactivar la vieja oposición entre “país grande” y “país pequeño” que recorre históricamente la relación. Por otro, el conflicto enfrenta a dos países que cuentan con una tradición política muy diferente. Así, mientras en la Argentina la acción política no-institucional está claramente instalada y constituye un repertorio habitual de las organizaciones sociales, en Uruguay, la existencia de una fuerte tradición institucional ha generado una gran desconfianza hacia todo tipo de acción que se desarrolle por fuera de los carriles institucionales habituales. De esta manera, el conflicto terminó por instalarse en un registro de difícil solución, el de la exacerbación de las lógicas nacionalistas, antes que en el terreno de la discusión del modelo de desarrollo.

En fin, más allá de las ambivalencias, las limitaciones y los matices, tanto los movimientos campesinos e indígenas como las nuevas movilizaciones socioambientales se instalan en un campo de difícil disputa. Por un lado, deben confrontar directamente la acción global de las grandes empresas transnacionales, provenientes del Norte desarrollado, que en esta nueva etapa de acumulación del capital se han constituido en los actores claramente hegemónicos del modelo extractivo-exportador. Por otro, en el plano local, deben confrontar con las políticas y orientaciones generales de los gobiernos –tanto a nivel provincial como nacional–, quienes en su mayor parte consideran que en la actual coyuntura internacional las actividades extractivas constituyen la vía más rápida –si no la única en esas regiones– hacia un progreso y desarrollo, siempre trunco y tantas veces postergado en estas latitudes.

La ilusión desarrollista y los nuevos escenarios

Convengamos que mucho se ha escrito acerca de las dificultades que una gran parte de los movimientos sociales actuales tienen para comprender e involucrarse en la compleja dinámica de reconstrucción del Estado, en el marco de procesos nacionales caracterizados como “gobiernos en disputa”. Incluso se ha criticado la visión simplificada, y por momentos dogmática-

mente autonómica, de movimientos y organizaciones sociales proclives a ignorar las ambivalencias y dilemas que afrontan dichos gobiernos. Sin embargo, muy poco se ha hablado acerca de la *ilusión desarrollista* que hoy parece caracterizar a varios gobiernos de la región y de las consecuencias que ello podría aparejar en términos de modelo de desarrollo.

En efecto, la expansión vertiginosa del modelo extractivo-exportador y los grandes proyectos de infraestructura de la cartera del IIRSA parecen alimentar una ilusión desarrollista, habida cuenta de que, a diferencia de los años noventa, las economías latinoamericanas se vieron favorecidas por los altos precios internacionales de los *commodities*, tal como se refleja en las balanzas comerciales y el superávit fiscal. El hecho no puede ser desestimado, muy especialmente luego del largo período de estancamiento y regresión económica de las últimas décadas. En esta coyuntura favorable, no son pocos los gobiernos que han relegado a un segundo plano o sencillamente escamoteado las discusiones acerca de los modelos de desarrollo posible, habilitando así un nuevo impulso de la visión productivista¹⁴.

Para el caso argentino, necesario es decir que las propuestas reformistas del gobierno de los Kirchner (2003-2007 y 2007-2008) han sido de corte más modesto y claramente continuista, tanto en lo que se refiere al nuevo paradigma agrario como a la explotación de los recursos naturales. Una excepción la constituye, como hemos dicho, el reclamo de los vecinos de Gualeguaychú, en la provincia de Entre Ríos. Sin embargo, en los primeros meses de 2008, se abrieron nuevas oportunidades políticas para una discusión, al menos en lo que respecta al modelo sojero y sus consecuencias, cuestión hasta ese momento reservada a unos pocos especialistas, ecologistas marginales y movimientos campesinos. Veamos, para terminar este artículo, en qué consiste dicha oportunidad.

A fines de 2007, con un objetivo recaudatorio y fiscalista, la nueva presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, aumentó las retenciones a las exportaciones de las mineras, hidrocarburos y productos agrícolas (entre ellos, la soja transgénica). Poco después, a principios de 2008, anunció un nuevo aumento de las retenciones al agro, elevándolas al 44%. Pese a que las medidas fueron adoptadas en un contexto de estampida de los precios internacionales de los productos agrícolas que benefician a los sectores agrarios, generaron un crudo enfrentamiento entre el gobierno y los diferentes sectores organizados del campo. De manera inédita, el frente agrario agrupó tanto a las grandes organizaciones rurales (entre ellas la tradicional Sociedad Rural Argentina, que nuclea a los grandes propietarios) como a aquellos representantes de los pequeños y medianos productores (Federación Agraria Argentina). Durante cien días, estos actores llevaron

a cabo conjuntamente una serie de bloqueos de rutas (paros agrarios y *lock-out*) que dejaron al país al borde del desabastecimiento y dividieron a la sociedad. La dinámica que adquirió el conflicto dio especial visibilidad a algunos de los socios “menores” del nuevo modelo sojero, entre ellos los pequeños productores agrarios, quienes llevaron a cabo una alianza *non sancta* con las corporaciones más poderosas, históricamente identificadas como el adversario. A su vez, las clases medias urbanas aportaron nuevas dimensiones políticas al conflicto, mediante numerosos cacerolazos realizados en apoyo a los reclamos agrarios, en los cuales no estuvieron exentas ni las cuestiones de orden racista y clasista (el rechazo visceral al peronismo, asociado tradicionalmente a los sectores populares), ni las demandas institucionales (la distribución del poder político, visiblemente concentrado en el matrimonio presidencial).

Por su parte, la escalada vertiginosa del conflicto mostró la escasa flexibilidad y apertura del nuevo gobierno de Cristina Kirchner, lo que se tradujo en una inesperada licuación del capital político y simbólico acumulado por el kirchnerismo desde la salida de la crisis y, por ende, en una importante pérdida de prestigio de la autoridad presidencial. Los sectores aliados al oficialismo no dudaron en leer el conflicto en clave latinoamericana, esto es, en el marco de una supuesta polarización entre la derecha oligárquica y un gobierno nacional-popular o nacional-desarrollista. Lo cierto es que, más allá de las hipérboles de los discursos y las falsas polarizaciones, a medida que el conflicto se agravaba, el gobierno tendió a enfatizar el carácter popular de la medida, poco explicitado al inicio, abriendo una oportunidad de discusión acerca de la necesidad de la “redistribución económica y social”.

Es importante subrayar que, en su mayoría, los cortes de ruta y bloqueos fueron sostenidos por asambleas de autoconvocados compuestas por pequeños productores. Uno de los lugares más emblemáticos de la protesta fue Gualaguaychú. Sin que sea legítimo hablar de solapamiento, el caso es que existió una suerte de comunicación entre la Asamblea Ambiental de Gualaguaychú y las protestas rurales, que reconocen como dirigente a Alfredo de Angelis, a la vez presidente de la Federación Agraria de la provincia de Entre Ríos y miembro de la Asamblea Ambiental de Gualaguaychú. Asimismo, el conflicto creó una oportunidad política para hablar de la situación de los excluidos del modelo sojero, esto es, de los movimientos campesinos e indígenas, que desde hace años vienen sufriendo el desplazamiento y despojo de sus tierras a causa de los desmontes y plantaciones de cultivos transgénicos, en especial en el norte argentino.

A fines de junio de 2008, en un contexto de estancamiento de las negociaciones y de agravamiento de la crisis, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner decidió sortear las dificultades y transfirió al

Parlamento la difícil tarea de decidir acerca del futuro de las retenciones al agro. En fin, pese a que el final todavía abierto del conflicto nos exime de realizar cualquier balance definitivo, lo cierto es que éste ha servido para traer a la discusión numerosos temas vinculados tanto al actual modelo de acumulación y el alcance del paradigma agrario como a los nuevos lenguajes de la movilización callejera. Así, por un lado, el conflicto activó la discusión acerca de la redistribución de la riqueza y la persistencia de las desigualdades, algo inimaginable poco tiempo atrás, interpelando al conjunto de la sociedad y sus diferentes voceros (partidos políticos, movimientos sociales, intelectuales, universidades, actores corporativos). Por otro lado, evidenció los puntos ciegos del nuevo paradigma agrario, que involucran una serie de problemáticas muy arduas y complejas y cuya discusión apenas está en sus albores. En este sentido, tal vez la puja entre el “campo” y el “gobierno” contribuya a generar un verdadero debate social sobre las diferentes implicaciones de un paradigma productivo que, a no dudarlo, engloba mucho más que a los productores agrícolas, supera la discusión acerca del tamaño de la unidad productiva o el porcentaje de retenciones que debe cobrar el Estado, y pone en tela de juicio la actual visión productivista y lineal del desarrollo, que predomina tanto en el gobierno como en el conjunto de los actores involucrados en el nuevo modelo.

Por último, el giro inesperado que adoptaron las movilizaciones agrarias en su lucha contra el alza de las retenciones plantea ciertos cuestionamientos acerca de las lógicas políticas y las formas de autoorganización en juego, en la medida en que éstas favorecieron y posibilitaron un reforzamiento –y una acumulación política– de la derecha conservadora. Así, las intensas movilizaciones y acciones de lucha, sostenidas especialmente por los pequeños productores autoconvocados, mostraron las peligrosas dimensiones de un discurso corporativo y pragmático, compatible con la forma asamblea, clave de bóveda de los nuevos movimientos sociales. Esta articulación perturbadora impone, por ende, la urgente necesidad de revisar críticamente el alcance de las nuevas formas de movilización.

Boaventura de Sousa Santos afirma que en las últimas décadas asistimos a una reducción de la figura de la democracia, identificada sin más con la democracia liberal y representativa. En este sentido, sostiene que “hemos perdido demodiversidad” (Santos, 2005). Mediante la acción colectiva, diferentes movimientos sociales latinoamericanos contestaron esta reducción, desarrollando otras formas de acción y deliberación, ligadas a la democracia directa. En el marco de esas movilizaciones cobró centralidad la forma asamblea, como nuevo paradigma de la política desde abajo. En la Argentina de 2008, el carácter asambleario de los movimientos se ha venido expresando en el conjunto de actores abordados en este ar-

título: las organizaciones piqueteras, las nuevas instancias de coordinación sindical, las organizaciones campesinas e indígenas, los movimientos socio-ambientales y, más recientemente, los autoconvocados agrarios.

Sin embargo, la forma asamblea está lejos de ser unívoca, pues su expansión no está vinculada necesariamente con una definición “sustancial” de la democracia o, para decirlo en términos más contemporáneos, con un proyecto de corte emancipatorio. Desde esta perspectiva, lejos estamos de aquellas experiencias ligadas al ideario revolucionario (la Comuna, el consejismo obrero), cuya discusión puebla bibliotecas enteras del pensamiento de las izquierdas. Así, la realidad que hoy confrontamos requiere, antes que nada, el reconocimiento de que nos encontramos frente a la generalización de una *forma* que apunta *primordialmente* a la defensa y desarrollo de la participación, producida y alimentada desde abajo. De ahí sus potencialidades contrahegemónicas cuando aparece asociada a un horizonte político radical e instituyente, pero también sus límites y posibles distorsiones cuando deviene una institución en sí misma, niega explícitamente su vinculación con un discurso político-ideológico pero, de facto, puede adoptar las formas más perversas del pragmatismo, acompañando o refuncionalizando las lógicas de poder de las clases dominantes.

Bibliografía

- Agosto, P. y Briones, C. 2007 “Luchas y resistencia Mapuche por los bienes de la naturaleza” en *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO) N° 22, septiembre.
- Armellino, M. s/f “Tensiones entre organización sindical y organización territorial: la experiencia de la CTA y la FTV en el período post-crisis” en Pereyra, S.; Schuster, F. y Pérez, G. *La huella piquetera. Avatares de las organizaciones de desocupados post-crisis 2001* (Buenos Aires: Ediciones El Margen).
- Barattini, Mariana 2007 “La organización en el marco de la individualización laboral. La Coordinadora de Trabajadores precarizados”, Segundo Congreso Latinoamericano de Antropología, Buenos Aires.
- Bergel, P. 2006 “Derivas uruguayas” en *M’Bigúa*, Año 1, N° 1, junio-diciembre.
- Domínguez, D.; Lapeña, P. y Sabatino, P. 2007 “Un futuro presente: las luchas territoriales” en *Nómaditas* (Bogotá: Instituto de Estudios Sociales Contemporáneos).
- Fornillo, Bruno s/f “Derivas de la matriz nacional popular: el pasaje de la movilización a la institucionalización del Movimiento Barrios

de Pie durante la presidencia de N. Kirchner, 2002-2007" en Pereyra, S.; Schuster, F. y Pérez, G. *La huella piquetera. Avatares de las organizaciones de desocupados post-crisis 2001* (Buenos Aires: Ediciones El Margen).

GER-Grupo de Estudios Rurales 2004 "17 de Abril: Día Internacional de la Lucha Campesina. Desalojos y arrinconamientos de campesinos y de comunidades indígenas en la Argentina" en *Realidad Económica* (Buenos Aires) N° 203.

Giarracca, Norma 2007 "La tragedia del desarrollo: disputas por los recursos naturales en la Argentina" en *Sociedad* (Buenos Aires) diciembre.

Harvey, David 2004 "El nuevo imperialismo: acumulación por desposesión" en *Socialist Register*. En <<http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/social/harvey.pdf>>.

Lozano, Claudio 2005 "Comportamiento de los sectores dominantes. Pobreza, distribución del ingreso y crecimiento en Argentina", Encuentro Plan Fénix en Víspera del Segundo Centenario, Buenos Aires, septiembre.

Lozano, Claudio 2006 "La Argentina desigual" en *MORENO* (Buenos Aires) N° 179, diciembre.

Natalucci, Ana s/f "El movimiento Evita... de los barrios a la plaza. Desplazamiento de una trayectoria" en Pereyra, S.; Schuster, F. y Pérez, G. *La huella piquetera. Avatares de las organizaciones de desocupados post-crisis 2001* (Buenos Aires: Ediciones El Margen).

Porto Gonçalves, C. 2001 *Geografías, movimientos sociales. Nuevas territorialidades y sustentabilidad* (México DF: Siglo XXI).

Rebón, J. 2007 *La empresa de la autonomía. Trabajadores recuperando la producción* (Buenos Aires: Colectivo de Ediciones Picaso).

Santos, Boaventura de Sousa 2005 *Reinventar la democracia. Reinventar el estado* (Buenos Aires: CLACSO).

Santos, Boaventura de Sousa 2007 "Más allá de la gobernanza neoliberal: el Foro Social Mundial como legalidad y política cosmopolitas subalternas" en Santos, Boaventura de Sousa y Rodríguez-Garavito, César (eds.) *El derecho y la globalización desde abajo. Hacia una legalidad cosmopolita* (Barcelona/México DF: Anthropos/Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Cuajimalpa).

Svampa, Maristella y Pereyra, S. 2003 *Entre la ruta y el barrio. La experiencia de las organizaciones piqueteras* (Buenos Aires: Biblos).

Notas

1 Para una presentación general de las organizaciones de desocupados, ver Svampa y Pereyra (2003).

2 La llamada "Plaza del Sí", convocada por Kirchner en el tercer aniversario de su gobierno (25 de mayo de 2006), fue la ocasión para reunir en un mismo espacio un conjunto heteróclito de organizaciones, que iba desde los organismos históricos de derechos humanos hasta las organizaciones piqueteras oficialistas, pasando por los sindicatos de la Confederación General del Trabajo (CGT) y las organizaciones del peronismo bonaerense.

3 Para una lectura del Movimiento Barrios de Pie, ver Fornillo (s/f). Para el Movimiento Evita, ver Natalucci (s/f).

4 Se trata de aquellos que proceden de la histórica y cuasi extinta Unión Cívica Radical, y que hoy apoyan al gobierno. El vicepresidente electo en diciembre de 2007, Julio Cobos, proviene de esta vertiente.

5 Desde 2003, el Partido Justicialista no ha presentado un candidato único en las elecciones nacionales. Así, en ese año hubo tres candidatos peronistas a la presidencia. Tanto Néstor Kirchner como Cristina Fernández se presentaron con el Frente para la Victoria, cuya composición partidaria es variable según los distritos, agrupando partidos de

centro y centroizquierda. En 2005, luego de un agitado congreso partidario, el Partido Justicialista fue intervenido. Todo indica que la actual normalización partidaria, bajo la jefatura de Kirchner, daría por terminada la tímida experiencia de transversalidad, inaugurada por el Frente para la Victoria, así como fortalecería el sistema tradicional de partidos.

6 Para una lectura pormenorizada de la relación entre la CTA y la FTV, se sugiere ver Armelino (s/f).

7 Para profundizar sobre este tema, ver Barattini (2007).

8 Cartera de proyectos de infraestructura de transporte, energía y comunicaciones consensuada por varios gobiernos latinoamericanos en el marco de la IIRSA.

9 Para Harvey, el actual modelo de acumulación implica cada vez más la mercantilización y depredación, entre otras cosas, de los bienes ambientales. La acumulación por desposesión (lo que Marx denominaba la "acumulación originaria") ha desplazado en centralidad a la dinámica ligada a la "reproducción ampliada del capital". Este argumento puede verse en Harvey (2004).

10 Retomamos aquí parte de nuestra investigación sobre conflictos socio-ambientales, desarrollada en el marco de la Universidad Nacional de General

Sarmiento, Argentina, que cuenta con la participación de Lorena Bottaro y Marián Solá Álvarez.

11 Recordemos que ya en 2002, en Perú, uno de los países latinoamericanos más afectados por el desarrollo de la megaminería, la comunidad de Tambogrande, compuesta mayoritariamente por población campesina de origen indígena, expresó su rechazo a la minería en un referéndum que se constituyó en una suerte de ícono y modelo para otros países.

12 Durante los noventa, las localidades petroleras del norte de Salta fueron un caso emblemático y anticipatorio, que expresaba cabalmente la combinación entre el predominio de grandes capitales privados y extranjeros en el marco

de una economía de enclave, y gobiernos provinciales y municipales de bajísima calidad institucional, caracterizados por la corrupción en los planos político y económico. En este marco, la implementación del modelo de explotación y control de los recursos naturales tiende a ser acompañada por políticas represivas y autoritarias que criminalizan la pobreza y la protesta social.

13 En 2003, el presidente Kirchner presentó el Plan Minero Nacional, mediante el cual dio continuidad y un nuevo impulso a las políticas de sus antecesores.

14 Asimismo, esto produjo un uso bastante lábil y hasta contradictorio del término “neodesarrollista” para caracterizar a diferentes gobiernos de la región.